



entrevistas y notas

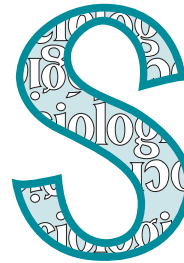


Entrevista con Jacqueline Peschard acerca de la evolución reciente del sistema político mexicano

*Roberto Gutiérrez L.**

ROBERTO GUTIÉRREZ L.: En una perspectiva global ¿cuál es tu opinión acerca del significado político de las elecciones federales de julio de 2000?, esto es, cuáles consideras que son las causas y los efectos principales de la alternancia en el Poder Ejecutivo y de la nueva composición del Legislativo.

Jacqueline Peschard: En mi opinión, el principal significado político de las elecciones del 2000 fue que se consumó la larga y accidentada transición a la democracia, entendida ésta como un proceso encaminado a la constitución de los poderes públicos a partir de elecciones libres y competitivas, es decir, como producto exclusivo de la voluntad de los ciudadanos, manifestada en las urnas. La alternancia en el Poder Ejecutivo federal es la expresión más clara de esta situación, porque da cuenta de que la decisión de quién gobierna no depende de arreglos cupulares o de la intervención de un aparato



* Profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y editor de *Sociológica*, robgut@usa.net

de poder, sino únicamente del voto popular. La alternancia confirma que el poder público tiene un origen democrático.

Las causas de la alternancia, es decir, lo que hizo posible que ésta se diera, están en la existencia de normas aceptadas y acatadas por todos y que garantizan la realización de elecciones transparentes y competidas, así como de un conjunto de partidos políticos con un nivel importante de implantación en la sociedad mexicana y con posibilidades efectivas de competir entre ellos por el poder.

La alternancia en el Poder Ejecutivo federal en México tiene un significado particular que la distingue de procesos similares en cualquier democracia estable en donde solamente implica el cambio de partido en el poder, o sea, el cambio de gobierno, sin ninguna implicación o efecto sobre las estructuras de gobierno o las relaciones institucionales. En este caso, la alternancia conlleva transformaciones en el ejercicio del poder (en el proceso de toma de decisiones), puesto que en primer lugar rompe con el binomio partido-gobierno que fue el pilar central del sistema de partido hegemónico, además de que el Ejecutivo federal ya no puede gobernar por sí solo, debido a que su partido no cuenta con mayoría en el Congreso federal, ni tampoco con una mayoría de gobiernos estatales encabezados por dicho partido; ahora tiene que gobernar con base en consensos políticos. Todo esto, aunado al hecho de que el triunfo del candidato del Partido Acción Nacional (PAN) no implicó directamente el gobierno de dicho partido dadas las diferencias entre el equipo del gobierno foxista y la directiva panista.

RGL: Después de las elecciones federales pasadas ¿qué diagnóstico harías del estado del sistema de partidos en términos de su continuidad o de las posibilidades de su reconfiguración en el corto o mediano plazo?

JP: Como consecuencia de las elecciones a las que haces referencia el sistema de partidos está atravesando por un reajuste importante, debido en primer lugar a que los ejes articuladores de los principales partidos políticos han desaparecido, obligándolos a buscar nuevas formas de integración. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la Presidencia y con ello su núcleo cohesionador y su liderazgo, lo cual lo enfrenta a la necesidad de definir nuevas reglas de integración, dirección y de disciplina internas, en un contexto en el que los triunfos electorales ya no están garantizados, sino por el contrario, son cada vez más difíciles de obtener. Con la alternancia se probó la eficacia del voto de castigo y ello ha alimentado el avance de los partidos diferentes al PRI.

Pero el resultado de las elecciones del 2000 no sólo afectó al PRI, sino al PAN y al Partido de la Revolución Democrática (PRD), que habían hecho del objetivo de sacar al PRI de los Pinos su principal motivo de acción. Hoy, el PAN tiene que reformular sus objetivos y directrices, ya que aun ganando las elecciones, no ganó el poder, pero no puede deslindarse por completo del gobierno (por la responsabilidad que tiene al respecto) como tampoco puede renunciar a los beneficios electorales que dicha identificación le proporciona.

El PRD, por su parte, y siendo el partido que más votos perdió en la elección del 2000, debe replantearse su orientación y sus formas de cohesión interna, porque además de que el PRI ha dejado de ser el enemigo a vencer, el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas se ha desvanecido debido a que ya no puede seguir siendo el candidato presidencial indiscutible y ello reclama la definición de un nuevo tipo de dirección del partido, capaz de articular a las diversas corrientes internas.

En suma, creo que en el corto plazo, y a medida que se vayan sucediendo las diferentes elecciones locales y la próxima elección federal intermedia, el sistema de partidos irá experimentando necesariamente una recomposición. El reto aquí es que ésta contribuya a reforzar el sistema de partidos en cuanto conjunto de proyectos políticos con un arraigo suficiente en el tejido social.

RGL: Vinculado al tema de los partidos políticos ¿consideras que las elites políticas tienen la madurez necesaria para generar los pactos y acuerdos indispensables que hagan avanzar el proceso de democratización en condiciones de estabilidad y gobernabilidad?

JP: El problema al que se enfrentan las elites políticas hoy es que la nueva distribución del poder las obliga a adoptar formas de comportamiento y de relación diferentes a las que estaban acostumbrados, además de que ya no solamente deben preocuparse por buscar la manera de que sus iniciativas prosperen, sino que además deben pugnar porque ello se dé en un contexto de gobernabilidad democrática, que implica la corresponsabilidad de los diferentes actores. Creo, entonces, que buena parte del problema está en las concepciones y percepciones que las elites tienen sobre los métodos de toma de decisiones y las maneras de hacer que éstas lleguen a buen fin, traducéndose en políticas efectivas, en un contexto de pluralidad, sin una fuerza política predominante. Dicho de otra manera, los valores y referentes políticos que persisten en la cultura política de las elites dificultan que éstas adopten los cambios necesarios, pues siguen actuando como

si el único responsable de las decisiones políticas fuera el presidente, como si todo dependiera de la voluntad política de éste, sin hacerse cargo de las limitaciones legales y políticas que hoy tiene dicho poder y de la corresponsabilidad de las diferentes fuerzas políticas.

Para decirlo sucintamente, las elites políticas tienen que generar los acuerdos necesarios para ir diseñando las reglas de la gobernabilidad democrática y sólo en el curso de este proceso podrán ir ganando en madurez democrática.

RGL: Parece evidente que tanto en los procesos electorales como en la vida política general del país, los medios de comunicación, y especialmente los electrónicos, han alcanzado una presencia y una influencia significativas, ¿cómo evalúas su papel, sus contribuciones o sus omisiones para la consolidación de la democracia en el país?

JP: Sin duda alguna los medios de comunicación hoy son actores centrales de nuestra vida política, por su enorme cobertura y penetración y por el peso que tiene la comunicación en la acción política. Actualmente, no existe asunto o actor político, desde luego candidato a algún cargo de elección, que no esté en los medios, de hecho, son éstos los que los hacen visibles y de algún modo les dan concreción, definiendo sus perfiles propios.

Durante la última década, los medios de comunicación han venido modificando su participación en la vida política al calor de los cambios que se han dado en ésta. Han dejado de ser comparsas incondicionales del poder, para abrirse a un debate más plural e incluso han entrado en competencia entre sí por la conquista de los públicos, lo cual ha redundado en la búsqueda de un mayor profesionalismo. Sin embargo, los medios de comunicación han impuesto su propia lógica y lenguaje en la política, limitando su capacidad argumentativa y de profundización. En este sentido, han contribuido al avance democrático más por necesidad que por inclinación; más como reacción que como producto de una vocación democrática.

RGL: A la luz de la experiencia electoral reciente y de las opiniones de las propias fuerzas políticas ¿cuál es tu visión del sistema electoral mexicano actual y cuáles, en todo caso, sus eventuales modificaciones futuras? Relacionado con ello, ¿consideras que las leyes e instituciones electorales locales presentan rezagos significativos con respecto al referente federal?

JP: El sistema electoral mexicano está ya institucionalizado y plenamente legitimado en la medida en que cuenta con reglas del

juego capaces de garantizar la realización de elecciones libres, justas y competitivas, por lo que ya no es un asunto que esté en los primeros lugares de la agenda de la reforma del Estado.

Hay, sí, temas pendientes por reglamentar como el voto de los mexicanos en el extranjero, las precampañas y el fortalecimiento de las atribuciones de fiscalización de los recursos de los partidos. Por lo demás, la ley es perfectible en virtud de que contiene algunas inconsistencias, pero no son esenciales para la adecuada administración de las elecciones.

En lo que toca a las leyes e instituciones electorales locales existen aún ciertas insuficiencias en determinados casos que hacen que todavía hoy algunos procesos electorales generen controversias difíciles de resolver estrictamente por la vía legal y jurisdiccional, los casos de Yucatán y de Tabasco son una muestra de ello. No obstante, este tipo de conflictos son cada vez menores en número y dimensión. Considero, entonces, que vamos en la ruta correcta y que se irán reformando las leyes electorales de aquellos estados en donde todavía no existe un consenso de los principales partidos al respecto.

RGL: Asociado a la evaluación de la fortaleza y legitimidad del sistema electoral mexicano aparece el tema de las vías y las formas del cambio político, ¿cuál es el peso político y cultural que a tu juicio siguen teniendo estrategias no democráticas de corte insurreccional y violento?

JP: La conformación de los poderes públicos sobre la base de elecciones libres y confiables alimenta la posibilidad de que el cambio político se procese a través de vías institucionales, y todo ello reduce la viabilidad de alternativas antiinstitucionales y violentas. Sin embargo, el acentuamiento de la pobreza y de la desigualdad social en México plantea un reto adicional a la joven democracia mexicana, ya que no solamente tiene que probar que es capaz de avanzar en la construcción de un orden institucional democrático, sino que tiene que dar muestras de que es la mejor fórmula para enfrentar ese desafío social.

En este sentido, creo que el papel de los partidos políticos es fundamental para borrar cualquier duda sobre la inconveniencia e inviabilidad de las vías armadas, es decir, es indispensable que se eliminen los dobles discursos que todavía se encuentran en algunos actores políticos, a la vez que se subrayen los beneficios y rendimientos favorables que ofrecen los caminos institucionales.

RGL: Junto a este tipo de obstáculos, ¿cuáles serían los principales lastres políticos, sociales o culturales que permanecen vigentes en el proceso de democratización después de la alternancia?

JP: Me atrevería a decir que en el momento actual son los rezagos culturales los que impiden avanzar en la eliminación de obstáculos políticos y sociales para progresar en la democratización del país. Está claro que hay que modificar andamiajes políticos y sociales, pero es necesario que exista un entendimiento común, un acuerdo, sobre cómo abordar dichos cambios, cómo irlos diseñando y poniendo en práctica, y ello requiere de un cambio de mentalidades, de actitudes, en suma, de una cultura política conformada a partir de códigos democráticos.

Por lo que toca a los avances democráticos logrados, en las interacciones e interrelaciones políticas no tienen ya lugar las posiciones maximalistas del todo o nada, o de suma cero, ahora deben explorarse y enfatizar fórmulas de consenso que aseguren que las decisiones se adopten por mayoría, previa deliberación amplia y plural y siempre reservando un espacio para las expresiones minoritarias.

RGL: Finalmente, ¿cómo caracterizarías hoy al sistema político mexicano, en términos de su relación con los procesos de transición y consolidación democráticas y de manera más específica en cuanto a su vinculación con los grandes principios de representatividad y gobernabilidad del propio sistema?

JP: El largo, accidentado y, a veces, aparentemente interminable proceso de transición democrática en México lo mostró como algo extremadamente difícil y complejo, pero visto desde el presente, fue un proceso que corrió por vías pacíficas, en las que la negociación política rindió frutos, es decir, probó su eficacia. Empero, lo que resta es quizá más complicado porque implica construir una nueva forma de hacer política, con reglas que se hagan cargo de la creciente diversidad política y pluralidad de los centros de poder, y que deje atrás los esquemas fuertemente centralizados y jerárquicos que creaban y recreaban un ejercicio del poder eficaz pero autoritario, y que ya no tiene cabida en la nueva composición del poder en México.

Si en el pasado la gobernabilidad autoritaria corrió aparejada a un déficit en la representatividad de la diversidad social, hoy hemos saldado la cuenta con la representatividad y el dilema está en cómo vincularla a la necesidad de construir una gobernabilidad democrática.